

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Emiliano García Segovia, vecino de Madrid, contra la resolución del Ministerio de Trabajo de diez de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, sobre pago de cuotas de la Seguridad Social agraria del interesado por sus fincas de pinar, debemos anular y anulamos dicha resolución por no ser conforme a derecho, declarando en su lugar que las fincas rústicas del recurrente que no son susceptibles ni se efectúa otra explotación que la resinera están excluidas en el régimen de la Seguridad Social Agraria y continúan rigiéndose por su régimen especial por el que cotizan, devolviendo al interesado las cuotas que indebidamente haya satisfecho en el régimen del que queda excluido; sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Becerril.—José María Cordero.—Adolfo Suárez. Enrique Medina.—José Gabaldón.—(Rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Vicente Toro Ortí.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

13560 *ORDEN de 13 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «A. E. G. Industrial, Sociedad Anónima».*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 19 de febrero de 1975 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «A. E. G. Industrial, S. A.».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de "A. E. G. Industrial, S. A.", domiciliada en Tarrasa y constituida bajo la denominación de "La Electra Industrial, S. A.", contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación del Trabajo de doce de julio de mil novecientos sesenta y ocho, sobre supresión de comedores para trabajadores de la misma Empresa, debemos confirmar y confirmamos esta Resolución por ser conforme a derecho; sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Becerril, José María Cordero.—Adolfo Suárez.—Enrique Medina.—José Gabaldón.—(Rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Vicente Toro Ortí.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

13561 *ORDEN de 19 de mayo de 1975 por la que se declaran extinguidos por vencimiento de plazo los permisos de investigación de hidrocarburos «Estella», «Santa Cruz de Campezo» y «Logroño».*

Ilmo. Sr.: Los permisos de investigación de hidrocarburos «Estella», «Santa Cruz de Campezo» y «Logroño» cuya segunda prórroga se otorgó a las Sociedades «Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, S. A.» (CIEPSA) y «Sociedad de Exploración de Petróleos Españoles, S. A.» (SEPE), por Decreto 1552/1970, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio), se extinguieron por caducidad al vencimiento de dicha segunda prórroga.

Tramitado el expediente de extinción de los mencionados permisos por la Dirección General de la Energía,

Este Ministerio, de acuerdo con el informe emitido por dicha Dirección General y con lo dispuesto en la legislación de hidrocarburos, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Declarar extinguidos los permisos «Estella», «Santa Cruz de Campezo» y «Logroño», y sus superficies, cuyas descripciones figuran en el mencionado Decreto 1552/1970 de otorgamiento de las segundas prórrogas, francas y registrables por aplicación de la disposición final primera de la Ley de 27 de junio de 1974.

Segundo.—Devolver las garantías prestadas para responder del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legislación de hidrocarburos y del Decreto 1552/1970 por el que se les concedió la segunda prórroga.

Lo que comunico a V. I. para los efectos oportunos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

13562 *ORDEN de 22 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 989/73, promovido por don Antonio Martín Arroyo, contra resoluciones de este Ministerio de 7 de enero de 1971 y de 3 de febrero de 1973.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 989/73, interpuesto por don Antonio Martín Arroyo, contra resoluciones de este Ministerio de 7 de enero de 1971 y de 3 de febrero de 1973, se ha dictado con fecha 7 de marzo de 1975, por la Audiencia Territorial de Madrid sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo formulado por don Antonio Martín Arroyo y en su representación por el Letrado don Javier del Valle Sánchez, contra las resoluciones de siete de enero de mil novecientos setenta y uno y tres de febrero de mil novecientos setenta y tres, dictada la segunda en desestimación de recurso de reposición contra la primera, por el Ministerio de Industria (Registro de la Propiedad Industrial), que concedieron a don Miguel Ángel Bilbao García el modelo de utilidad número ciento cincuenta y cuatro mil setenta y dos para "cortina de ducha perfeccionada", debemos declarar y declaramos no haber lugar al mencionado recurso contencioso, por hallarse ajustadas a derecho las resoluciones recurridas. Todo ello sin pronunciamiento especial en cuanto a costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

13563 *ORDEN de 22 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife en el recurso contencioso-administrativo número 3/74, promovido por don Andrés Oliva Núñez y don Graciliano Ruiz Rodríguez, contra resolución de este Ministerio de 10 de octubre de 1972.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 3/74, interpuesto por don Andrés Oliva Núñez y don Graciliano Ruiz Rodríguez, contra resolución de este Ministerio de 10 de octubre de 1972, se ha dictado con fecha 13 de febrero de 1975 por la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Munguía Santana, en representación de don Andrés Oliva Núñez y don Graciliano Ruiz Rodríguez contra la resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha diez de octubre de mil novecientos setenta y dos que autorizó a la Empresa "Unión Eléctrica de Canarias, S. A.", para ampliar la central de Las Caletillas, sin hacer especial imposición de las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al recurso de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

13564 ORDEN de 22 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 302.707, promovido por «Alter, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 7 de abril de 1967.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 302.707, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Alter, Sociedad Anónima», contra resolución de este Ministerio de 7 de abril de 1967, se ha dictado con fecha 5 de marzo de 1975 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de "Alter, S. A.", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de siete de abril de mil novecientos sesenta y siete y contra la desestimación presunta del recurso de reposición promovido contra el mismo, absolviendo a la Administración, debemos declarar y declaramos que las mencionadas resoluciones recurridas que concedieron el registro de la marca número doscientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y siete, "Atelier 49", y gráfico, son conformes a derecho y por ende válidas y subsistentes; sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

13565 ORDEN de 22 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 501.189, promovido por doña Pilar Jáuregui Díaz y 32 recurrentes más, contra resolución de este Ministerio de 6 de octubre de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 501.189, interpuesto ante el Tribunal Supremo por doña Pilar Jáuregui Díaz y 32 recurrentes más, contra resolución de este Ministerio de 6 de octubre de 1965, se ha dictado con fecha 18 de enero de 1975 sentencia, cuyo parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación, al rechazarse las causas de inadmisibilidad, del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Federico José Olivares de Santiago, ostentando la representación procesal de doña Pilar Jáuregui Díaz, don Joaquín Zapatero Cristóbal, don Carlos González-Hontoria Cañada, don José Almendro López, doña María Micaela Martín Martínez, doña María Pilar Tornos Pulido, don Luis Fernández Fernández, don Arturo Abos Varela, don Antonio Aspiazu Zurimendi, don Fernando Villamil Rodríguez, don Angel Bejarano Herrero, don Alvaro Levenfeld González de la Riva, don Luis Aguila Martínez, don Tomás Pérez González, don Alfredo Sebastián Aperribay, don Emilio Corrochano Lahera, doña Matilde Corrochano Lahera, don Fernando Ballesteros Mazariegos, don Antonio Madrid Cristóbal, doña Juliana Bermejo Moreno, don Juan Miralles Salmerón, doña María Fernández Rodríguez, doña Sofía Coll Camino, doña Matilde Solano Campuzano, don Joaquín Berjano Valdés, don Ramón Pérez del Rosal Linares, don Crisanto Pérez Abad del Valle, don Vicente Román Navarro, doña Edelmira Menéndez Álvarez como viuda de don Cipriano Martín Díaz, don Alejandro López-Ocaña Bango, don José Luis Larrauri Gradmisón, doña Teresa Zubieta Atucha, doña María Lourdes Arredondo García-Becerra y doña María de los Angeles Alicia Fernández

García, como viuda de don Constantino Palacio González, contra resolución presunta del Ministerio de Industria y la resolución expresa de la Dirección General de Minas y Combustibles del mismo Departamento Ministerial de seis de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, declaramos que dichas resoluciones no se hallan ajustadas al ordenamiento jurídico y, en su lugar, declaramos el derecho de los empleados que fueron de la disuelta Comisión para la Distribución del Carbón recurrentes, así como de don Ciriaco Martín Díaz y de don Constantino Palacio González, fallecidos, a percibir en su totalidad, y con relación a éstos sus herederos, las indemnizaciones complementarias que para los mismos fueron acordadas por resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Comercio, comunicada a las Delegaciones de la Comisión por el oficio de su Secretaría General de veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, así como al personal de la central, sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes de las costas del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

13566 ORDEN de 22 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 302.917, promovido por «Electra Malpica», contra resolución de este Ministerio de 2 de mayo de 1969.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 302.917, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Electra Malpica», contra resolución de este Ministerio de 2 de mayo de 1969, se ha dictado con fecha 27 de febrero de 1975 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Empresa "Malpica" contra la resolución del Ministerio de Industria de dos de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, que confirmo la de uno de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, las que debemos confirmar y confirmamos por estimarlas ajustadas a derecho sin imposición de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

13567 ORDEN de 22 de mayo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 302.866, promovido por «Christian Dior, S. A. r. l.», contra la resolución de este Ministerio de 21 de marzo de 1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 302.866, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Christian Dior, S. A. r. l.», contra resolución de este Ministerio de 21 de marzo de 1968, se ha dictado con fecha 13 de febrero de 1975 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, con desestimación de las causas de inadmisibilidad, se estima el recurso interpuesto por la representación legal y procesal de la Sociedad "Christian Dior, S. A. r. l.", contra la Administración, impugnando la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de veintinueve de marzo de mil